

Capítulo 1.9

Evaluación integral de la sostenibilidad bajo el modelo de territorios solidarios en Colombia desde un enfoque multidimensional

Mario Samuel Rodríguez Barrero¹

Patricia Izquierdo Hernández²

Aracelly Buitrago Mejía³

<https://doi.org/10.61728/AE20250911>



¹ Universidad Cooperativa de Colombia. mario.rodriquezb@campusucc.edu.co. ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9356-6764>

² Universidad Cooperativa de Colombia. patricia.izquierdo@ucc.edu.co. ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7377-9439>

³ Universidad del Tolima. abuitragom@ut.edu.co. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6583-7827>

Resumen

El presente artículo examina las dimensiones económicas, sociales, culturales y ambientales de las organizaciones de economía solidaria como pilares fundamentales para el desarrollo de comunidades autosostenibles, enmarcadas en los principios del territorio solidario. La investigación, de carácter descriptivo y enfoque cualitativo, se realizó con asociaciones agrícolas de los municipios de Ibagué y Espinal, Colombia. Los hallazgos destacan que, si bien la calidad de vida en estas comunidades es considerada aceptable, persisten percepciones de abandono gubernamental y una limitada participación ciudadana en procesos políticos. Además, se evidencian carencias significativas en infraestructura vial, oferta educativa y servicios públicos, las cuales comprometen su sostenibilidad. La evaluación enfatiza la necesidad de un enfoque integral que combine estas dimensiones, fomentando la cocreación de soluciones con las comunidades para enfrentar los retos identificados. Este enfoque participativo resulta crucial para fortalecer la sostenibilidad, mejorar las condiciones de vida y consolidar a las comunidades rurales como territorios solidarios resilientes y sostenibles.

Introducción

Actualmente se vive una crisis alimentaria en países de ingresos bajos debido a factores como la inflación que incrementa el precio de los alimentos, generando una situación de inseguridad alimentaria y nutricional. Según el World Bank y el International Bank for Reconstruction and Development (2023), 258 millones de personas en 58 países experimentaron niveles críticos de inseguridad alimentaria en 2022. Ante este escenario, se requieren soluciones efectivas emanadas de las comunidades en sus territorios que permitan garantizar su seguridad, principalmente mediante estrategias de asociatividad y creación conjunta de soluciones.

En este escenario, las organizaciones solidarias desempeñan un papel fundamental, pues mediante la colaboración, cocreación de soluciones y

una gestión efectiva, pueden contribuir a mejorar la administración de la cadena de suministro alimentaria, promoviendo prácticas sostenibles en la producción de alimentos y el acceso a mercados. En consecuencia, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) (2021) reconocen que los sistemas agroalimentarios comunitarios, conformados por asociaciones y cooperativas, así como los mismos territorios rurales, son clave para la implementación de acciones transformadoras para la reducción de la pobreza, la inseguridad alimentaria y la desnutrición.

En Colombia, los territorios solidarios constituyen un espacio para promover el desarrollo de las comunidades mediante prácticas asociativas entre actores públicos, privados, gremios y otras formas de expresión ciudadana, que se unen para coadyuvar en la búsqueda de soluciones a las problemáticas económicas, sociales, ambientales o de otra índole, que afecten a las comunidades principalmente de zonas rurales, quienes se asocian de manera autónoma para participar en procesos de producción, transformación o comercialización basados en los principios de la economía de la solidaridad (Duque et al., 2021).

Dadas las experiencias de relacionamiento social fundamentadas en la cooperación y la ayuda mutua entre las comunidades locales, las organizaciones solidarias y otros actores trabajan por el bien común. Se considera que desde las dimensiones económicas, sociales, culturales y ambientales de las organizaciones de la economía solidaria, se pueden determinar los corolarios que permitan el fortalecimiento de estas comunidades para que sean autosostenibles, mediante el Modelo de Territorios Solidarios (Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, Fundación Universitaria de San Gil y Fundación Coomuldesa, 2016).

Base teórica

La evaluación integral de la sostenibilidad para el fortalecimiento de las comunidades se presenta bajo las dimensiones del desarrollo sostenible, social, económica, ambiental y cultural. En el ámbito social, los territorios solidarios se destacan por considerar a las organizaciones solidarias como

un medio para promover el desarrollo social de sus habitantes y mejorar la calidad de vida de todos. Desde una perspectiva económica, se caracterizan por estimular la economía a través del el autoempleo y la autogestión, redistribuir el ingreso y generar oportunidades de desarrollo basadas en la satisfacción de necesidades. En cuanto al ámbito cultural, se distinguen por basar su actuación en valores como la ayuda mutua, la responsabilidad, la democracia, la igualdad, la equidad y la solidaridad. En la dimensión ambiental, se concibe un desarrollo en armonía con la naturaleza, uso de energías, limpias, renovables y la conservación del (Dávila et al., 2018).

Desde estos postulados, el fortalecimiento de las comunidades no se fundamenta en los paradigmas económicos convencionales, sino que propone un modelo económico centrado en el desarrollo comunitario, particularmente en las zonas rurales que a menudo experimentan la falta de atención por parte del Estado (Schwab et al., 2020). Es así como en el contexto de los territorios solidarios se valora la importancia de establecer una relación equilibrada entre la economía, las personas y su cultura, la naturaleza, el territorio y su entorno en su conjunto (Ferrando et al., 2020) y es que a través de estos territorios se busca el desarrollo rural, entendido como un proceso de reactivación de la economía y dinamizador de la sociedad local, brindando oportunidades para mejorar la calidad de vida de la población en su territorio mediante la oferta de trabajos dignos, donde las personas son sujeto, actor y fin de la economía. Es así como, por medio de la economía solidaria, se estimulan iniciativas de desarrollo autóctonas y se promueven los principios de educación, formación e información para alcanzar la competitividad de las organizaciones bajo estos paradigmas (Juste et al., 2011).

En naciones en vías de desarrollo como Colombia, las organizaciones solidarias, como asociaciones y cooperativas, desempeñan un papel fundamental en el empoderamiento de las comunidades, en especial de mujeres y poblaciones vulnerables, al facilitar su acceso a los recursos y servicios ofrecidos por estas entidades (Mwambi, Bijman y Galie, 2021). En esta misma línea, Sathapatyanon et al. (2018) llevaron a cabo un análisis del impacto de las organizaciones de agricultores y las redes cooperativas en el desarrollo de la cadena de suministro de alimentos en Tailandia. Evaluaron las dificultades que enfrentaban los agricultores antes y después de unirse

a dichas redes o cooperativas, y demostraron que estas estructuras contribuyeron a la reducción de los costos de transacción y de incertidumbre en los mercados para los productores. Además, mitigaron problemas como la explotación y el comportamiento oportunista por parte de los intermediarios, situación que denota la necesidad de fortalecer la gobernanza, el liderazgo, los aspectos financieros y las habilidades de negociación como corolarios necesarios al fortalecimiento de comunidades sostenibles en el marco del Modelo de Territorios Solidarios (Bernardi, 2021; Serrato y Torres, 2022).

Para promover el comercio justo en las zonas rurales, en el marco de la economía solidaria, es fundamental que las actividades agrícolas se orienten hacia estos principios. Esto implica que las actividades agrícolas se organicen en torno a la autogestión y la democratización. En este contexto, surgen asociaciones, organizaciones comunitarias y cooperativas que adoptan el cooperativismo como modelo integral para la producción, el consumo, la formación interna y la integración en el territorio solidario. Estas entidades promueven la cooperación, la solidaridad, la autoorganización y la democratización entre sus miembros, que se convierten en pilares fundamentales de su estilo de vida (Schwab et al., 2020).

Un elemento adicional para la evaluación integral de los territorios solidarios es su enfoque en el consumo local. Esto se relaciona estrechamente con el concepto de economía circular, donde los miembros de la comunidad que buscan alimentos de alta calidad y orgánicos demuestran solidaridad con los productores al comprar localmente. Este apoyo mutuo fortalece los lazos comunitarios, estimula el crecimiento económico local al reinvertir el capital financiero en la región y da lugar a la generación de empleos y al fomento de nuevos emprendimientos solidarios y sostenibles (Piccoli et al., 2021; Baldi et al., 2019).

En este contexto, un territorio solidario constituye un espacio en el que diversos actores colaboran conjuntamente para alcanzar metas comunes, guiados por los principios de solidaridad y cooperación. La conformación de estos territorios no solo depende de consideraciones geográficas, sino también de procesos culturales y condiciones socioeconómicas de quienes participan en él. El corolario distintivo de estos territorios, en este caso, es la participación colectiva en actividades que buscan el beneficio y el in-

terés común (Pérez y Uribe, 2016; Amariles, 2017; Mason et al. 2019; Rua et al. 2018; Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias UAEOS, 2016).

Edelman (2022) destaca la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los campesinos en Colombia como una de las principales razones que lleva a la creación de estos territorios. A pesar de su relación directa y especial con el territorio a través de la producción sostenible de productos agrícolas, se enfrentan a una posición desventajosa en el mercado convencional. La falta de capacidad para negociar precios y cumplir con los requisitos de los principales actores del sistema agroalimentario los margina del sistema (Piccoli et al., 2021, p. 3). En este contexto, la asociatividad fomentada en los territorios solidarios emerge como un corolario necesario para recuperar su autonomía y obtener el reconocimiento que merecen por su labor.

Como antecedente al Modelo de Territorios Solidarios, Rodríguez et al. (2021) desarrollaron un proceso investigativo que resultó en el diseño de un modelo de ecorregión solidaria, impulsado a comunidades marginadas por el Estado a embarcarse en un proceso de concientización, capacitación, formalización y seguimiento para transformar a familias campesinas que luchaban individualmente en una colectividad que trabaja cooperativamente en pro de un objetivo común, generando seguridad alimentaria para la región. Desde esta experiencia, se considera que el Modelo de Territorios Solidarios puede desarrollarse en diversas geografías, donde la regionalización se destaca como una oportunidad para expresar la creatividad y pluralidad desde los territorios, integrando la enseñanza, investigación y extensión como un espacio propicio para nuevos desarrollos que pueden adaptarse a las necesidades locales. En este escenario, el estudio se lleva a cabo en colaboración con representantes de 3 asociaciones y cooperativas de El Espinal, Colombia, con el objetivo de describir los elementos fundamentales para la creación de un territorio solidario. Para abordar esta cuestión, se plantea la pregunta: ¿Cuáles son los corolarios para el fortalecimiento de comunidades sostenibles mediante el Modelo de Territorios Solidarios?

Territorios Solidarios, un enfoque integral para el desarrollo local sostenible

El territorio solidario es tema recurrente en académicos y de reflexión, siendo reconocido por la presencia significativa de organizaciones de economía solidaria que inciden en el desarrollo local (Corzo et al., 2020). Siguiendo esta línea, la UAEOS (2016) afirma que a lo largo de la historia, los territorios han experimentado dinámicas diversas y conflictivas, por lo que construir un territorio donde reine la solidaridad resulta un desafío complejo. El concepto de “territorio solidario” representa más bien una aspiración, un ideal que inspira nuevas formas de vivir en el mundo. En esencia, este término encarna la resistencia ante un modelo económico basado en la competencia y la acumulación de riqueza, el cual debería beneficiar a toda la comunidad.

En este orden de ideas, el territorio solidario no se limita a una ubicación geográfica específica ni a características ambientales exclusivas. Abarca dimensiones económicas, sociales y culturales que convergen en un espacio habitado por comunidades, generando dinámicas únicas. En Colombia, no existe un programa o norma que defina los territorios solidarios; surgen espontáneamente debido a la iniciativa de las comunidades que practican diversas formas de economía social y solidaria. Esta comprensión es esencial para el desarrollo de políticas y estrategias. Por ejemplo, el fortalecimiento de las organizaciones sociales puede contribuir a una mayor cohesión y articulación de las comunidades locales, lo que combate las desigualdades derivadas del capitalismo y la ineficiencia del Estado (Dávila et al., 2018).

Como se mencionó anteriormente, los corolarios para fortalecer comunidades sostenibles mediante el modelo de territorios solidarios se evidencian en las dimensiones sociales, económicas y culturales. Desde la dimensión social, el modelo de territorios solidarios busca fusionar la cooperación empresarial con la unión de individuos para satisfacer sus necesidades, abordando los problemas sociales directamente en los territorios, para lo cual es fundamental promover la participación cívica y restaurar la confianza y reciprocidad como fundamentos de la asociatividad. (Álvarez, 2017). Para lograrlo, se inicia organizando las demandas de las

comunidades y tomando medidas concretas para abordarlas, manteniendo el enfoque en que la economía debe servir tanto para solventar las preocupaciones sociales (Battisti et al., 2020).

Desde la dimensión económica, desde el Modelo de Territorios Solidarios se pretende establecer una economía basada en la cooperación y no en la competencia, construyendo solidaridad en el trabajo, en las finanzas, en la educación, en la distribución y consumo, permitiendo orientar las acciones económicas (UAEOS et al., 2016). Es así como la solución a los problemas económicos dentro de estos territorios se basa en la ayuda mutua entre pequeños productores y consumidores, la búsqueda del bien común y la asociatividad como elementos clave para solventar la ausencia de recursos económicos (Álvarez, 2017).

Finalmente, la dimensión cultural desempeña un papel fundamental en la formación de los territorios solidarios, ya que su comprensión contribuye a forjar una cultura colectiva basada en la solidaridad. Desde esta perspectiva, se examinan los comportamientos individuales y colectivos, los valores, tradiciones, creencias y normas sociales que prevalecen en las comunidades, así como la educación cooperativa en el territorio, para la sensibilización hacia los principios cooperativos y proveer herramientas efectivas a las comunidades para mejorar sus condiciones de vida manteniendo vivas sus tradiciones (Guridi y Mendiguren, 2014).

Es así como el modelo de territorios solidarios se visualiza como un espacio que convoca a diversos actores sociales, incluyendo autoridades estatales, empresas, organizaciones solidarias, instituciones educativas de todos los niveles, empresarios y la comunidad en general, con el propósito de impulsar y coordinar esfuerzos para transformar el actual modelo centrado en la búsqueda de ganancias y acumulación de capital, hacia un modelo que se basa en los principios y valores de la solidaridad, donde el enfoque principal es el ser humano y su entorno (UAEOS et al., 2016), cambio que encuentra su motivación en movimientos latinoamericanos que promueven una conexión directa entre la producción, las relaciones sociales y la satisfacción de las necesidades humanas en armonía con el ambiente (Mason et al., 2019).

A partir de estos elementos, se puede definir el territorio solidario como un espacio de construcción social articulado a una economía diferente a la tradicional que potencia una racionalidad sustantiva con accio-

nes incluyentes desde lo micro, con redes y alianzas a nivel meso y con la gestión de políticas públicas a nivel sistémico, para mejorar las condiciones de vida de las comunidades, administrando los recursos de forma que se satisfagan sus necesidades (Amariles, 2017). En este modelo se destaca la relación entre las fuerzas vivas del territorio y el Estado en la búsqueda de redistribución equitativa y uso eficiente de los recursos.

Considerando que el sistema económico tradicional no logra cerrar la brecha de desigualdad ni satisfacer las necesidades básicas de gran parte de la población, emergen los territorios solidarios como motores de desarrollo social y crecimiento económico a través de la promoción de la innovación, cultura, bienestar social, confianza y reciprocidad (Pérez y Uribe, 2016). Desde estos prolegómenos, el Modelo de Territorios Solidarios busca fortalecer la economía rural solidaria al fomentar la cooperación, cocreación de soluciones y cultura de participación ciudadana con posturas y acciones críticas bajo una gobernanza democrática que conlleve a la consolidación de políticas públicas, orientadas a generar condiciones de vida digna.

En síntesis, tanto la economía solidaria como los territorios solidarios tienen como objetivo que el ser humano sea el centro de su desarrollo, promoviendo una cultura de colaboración y valores compartidos que impulsan la innovación social y adaptación colectiva en entornos complejos. Los principios fundamentales de la economía solidaria sirven de base para la consolidación de los territorios solidarios, fomentando una cultura de colaboración, confianza y valores compartidos entre individuos, grupos y entidades públicas y privadas. Esto se traduce en el fortalecimiento de las capacidades de innovación y creatividad, estimulando el aprendizaje en la exploración de nuevas ideas y enfoques, promoviendo la autogestión, el trabajo en equipo, la capacidad de adaptación colectiva y previniendo la fragmentación social.

Metodología

En cuanto al método, la investigación se desarrolla bajo un estudio descriptivo cuyo propósito es determinar las características y comportamientos de conjuntos homogéneos de datos mediante criterios sistemáticos (Guevara et al., 2020). El enfoque de investigación utilizado es cualitati-

vo, lo que implica un proceso sistemático de observación y evaluación de eventos cotidianos y actividades relacionadas con el fenómeno en estudio. Esto permite obtener una perspectiva analítica mediante métodos de recolección de datos no convencionales (Otero, 2018). El proceso se lleva a cabo mediante dos fases secuenciales, en la primera se identifica y reconocen las características intrínsecas y extrínsecas del territorio, teniendo en cuenta que cumplan con una serie de criterios predeterminados. En la segunda fase se define la población conformada por 79 asociados. Se trabaja con toda la población para identificar características comunes y establecer variaciones dentro de una misma comunidad (Ventura 2017; Buendía et al., 2018).

Desarrollo

Según la Sociedad de Agricultores de Colombia (2020), el país posee una ubicación privilegiada que le otorga la ventaja de contar con todos los pisos térmicos, además de abundantes recursos hídricos, condiciones que hacen de Colombia un país propicio para la agroindustria, la producción y transformación de productos agrícolas. Además, dispone de un vasto potencial productivo en aproximadamente 40 millones de hectáreas destinadas a la agricultura, aunque de sus 175 mil kilómetros de vías terciarias, solo 10 % se encuentra en buen estado, lo que dificulta la conectividad de las zonas rurales.

Estos datos evidencian la deuda histórica del Estado con el campo colombiano. De acuerdo con Arango et al. (2020), las zonas rurales del país enfrentan serios problemas en cuanto a su infraestructura física y vial, lo que complica tanto la distribución como la comercialización de productos hacia mercados y localidades remotas que dependen de estos suministros. Esto, a su vez, resulta en un aumento significativo de los costos de transporte y movilidad. Además de estas dificultades, las poblaciones rurales en estas regiones a menudo se enfrentan a la falta de acceso servicios públicos, educación, salud, Internet, créditos, entre otros.

El conflicto armado interno colombiano dejó una huella profunda en las comunidades rurales, marcada por la paralización de la agricultura y el desplazamiento hacia áreas urbanas. Aunque el posconflicto ha brindado

oportunidades de mejora, estas situaciones persisten. Este conflicto ha tenido un impacto negativo en el campesinado colombiano, afectando su papel económico, su participación en la vida política, social y cultural, así como su capacidad para negociar con diversos actores. Además, ha afectado la preservación del territorio para un desarrollo sostenible y en la gestión de sus actividades productivas, lo que ha llevado a que el campesino pierda protagonismo en la historia del país debido a estos factores (Ardila et al., 2020).

Ante este escenario, los gobiernos colombianos han priorizado el respaldo a grandes empresas y conglomerados económicos, relegando en muchos casos los fundamentos de equidad social y económica, generando un impacto perjudicial en la seguridad y bienestar de las comunidades rurales que enfrentan cotidianamente la ausencia del Estado y, como respuesta a esta situación, se han organizado mediante organizaciones solidarias como una alternativa viable para abordar estas necesidades y desigualdades (Serna y Rodríguez, 2015; Di Masso et al., 2021).

La economía rural también se ha visto impactada por la apertura económica, la política de internacionalización y la globalización. Aunque estas tendencias han brindado oportunidades para la exportación de materias primas, han llevado consigo un rápido aumento de las importaciones, especialmente de alimentos procesados. Esto ha tenido un efecto negativo en los precios del mercado local, lo que a su vez ha resultado en dificultades económicas para los agricultores y ha contribuido al deterioro de la calidad de vida en las zonas rurales (Moya, 2011). Además, esta situación ha llevado a una creciente dependencia de la importación de alimentos, impactando la seguridad alimentaria del país (Vivas, 2021).

Ante este panorama, los productores agrícolas deben desarrollar capacidades para ser competitivos, emprendedores e innovadores. Por su parte, el Estado y las universidades tienen la responsabilidad de proporcionar formación y herramientas para el desarrollo de tecnologías de producción, transformación y comercialización, así como para la negociación, consecución de recursos y formulación de proyectos de inversión, de manera que se transforme la cultura y visión del sector hacia una industrialización sostenible orientada a la generación de valor para sus negocios, sus familias, sus territorios y proyectos de vida (Barrios, 2019; Peón et al., 2020).

Dentro de las organizaciones agrícolas solidarias se presentan diversas problemáticas, como el desconocimiento de principios de administración, la necesidad de una planificación estratégica, carencia de reglamentos y estatutos que regulen su funcionamiento, evaluación y control de la gestión y falta de interés de algunos asociados, quienes dejan de contribuir al crecimiento comunitario una vez alcanzan la estabilidad individual. No obstante, es importante destacar que estas organizaciones también ofrecen ventajas, como el respaldo técnico en procesos de producción, reducción de costos que conduce a la eficiencia económica, el fortalecimiento mutuo y colectivo del sector, y la posibilidad de maximizar las utilidades (Blanco, 2018).

Esta investigación se centra en las asociaciones de productores de mango en El Espinal, un municipio del departamento del Tolima en Colombia. Esta región ha sido tradicionalmente frutícola y se destaca como uno de los principales productores de mango en el país. La cadena de producción de mango en El Espinal fue identificada como un subsector con potencial para el Programa de Transformación Productiva, lo que facilitó la exportación de esta fruta a varios países (Corporación Colombiana de Investigaciones Agropecuarias - Corpoica y Asociación Hortofrutícola de Colombia - Asohofrucol, 2013).

En el caso del municipio de Ibagué, se destacan asociaciones agrícolas dedicadas a la producción de café, cacao, aguacate, cítricos, frutas tropicales y el cultivo de hortalizas. Estas asociaciones han jugado un papel fundamental en la economía local, promoviendo prácticas agrícolas sostenibles y fomentando la cohesión comunitaria. Entre ellas se encuentran grupos organizados que trabajan bajo principios de economía solidaria, enfocándose en fortalecer cadenas productivas, mejorar la calidad de los productos y diversificar los mercados. Ibagué. Estas organizaciones también han implementado procesos de certificación de calidad, como sellos orgánicos y comercio justo, fortaleciendo su competitividad. Además, se han destacado por promover iniciativas de valor agregado, como la producción de derivados de cacao, la transformación de frutas en pulpas o mermeladas, y el desarrollo de productos innovadores contribuyendo al desarrollo socioeconómico de sus comunidades, mejorando los ingresos familiares y fomentando el bienestar rural.

Resultados

El análisis de la distribución por edades de los miembros de las familias de los asociados revela que el 9,4 % de ellos son menores de 18 años, el 22,2 % se encuentra en el rango de 12 a 18 años, el 38,89 % tiene edades comprendidas entre 19 y 26 años, el 12,51 % se sitúa en el rango de 27 a 34 años, y el 17 % restante supera los 35 años. Este dato sugiere que la mayoría de los miembros de estas familias son jóvenes, lo que se asocia con un mayor interés en la participación en grupos sociales, la búsqueda de oportunidades para mejorar sus ingresos, la innovación y el deseo de crecimiento y transformación en sus entornos.

Desde una perspectiva económica, al comparar el nivel de vida de los asociados con el de sus padres, el 50 % de los encuestados afirma que viven en mejores condiciones que sus progenitores. Esto indica que su participación en las asociaciones ha sido beneficiosa, ya que les ha proporcionado aprendizaje, apoyo y herramientas para su desarrollo socioeconómico, además de fomentar la colaboración entre productores. Un 33,3 % también informa que su calidad de vida ha mejorado. Sin embargo, algunos enfrentan dificultades debido a su falta de conocimiento sobre los cambios e innovaciones sociales, ya que la mayoría de sus procesos son empíricos, lo que los coloca en desventaja frente a las grandes empresas capitalistas.

En cuanto a la situación económica y laboral de los asociados, el 44,4 % de ellos está muy preocupado debido a la falta de apoyo estatal en el financiamiento de sus cultivos, la limitada disponibilidad de vías de acceso para comercializar sus productos y los altos costos de los agroquímicos necesarios para la producción de la fruta, entre otros factores. Solo el 5,56 % indica que rara vez tienen este tipo de preocupaciones, ya que mantienen una situación económica y laboral estable gracias a la venta de sus productos a través de la asociación.

El 44,4 % de los asociados han participado en organizaciones sociales y están familiarizados con los objetivos y características de las mismas, donde el factor determinante no es el capital financiero, sino el trabajo colectivo y el capital social. Esto implica que su objetivo no es solo maximizar las ganancias, sino lograr una rentabilidad económica y satisfacción

de necesidades comunes. Los asociados reconocen que, dentro de la economía social y solidaria, se sigue un enfoque de gestión democrática, con igualdad de deberes y derechos, distribución equitativa de las ganancias y reinversión de los excedentes en la mejora de los servicios comunitarios. Solo el 11,1 % de los encuestados indican que rara vez han participado en organizaciones sociales debido a la falta de información sobre los beneficios que estas entidades pueden brindar.

Por otra parte, los resultados indican que solo el 36,67 % de los jóvenes y el 53,3 % de los niños tienen acceso a la educación, situación preocupante porque en edades tempranas se forman valores, principios y conocimientos fundamentales que son difíciles de adquirir en la vida adulta. Además, la falta de acceso a la educación limita la capacidad de los jóvenes para aprender sobre mejoras en la producción agropecuaria a través de innovaciones y tecnologías, así como su acceso a información en línea debido a la compleja disponibilidad y restricciones de acceso a Internet, teniendo como agravante que la educación es la herramienta fundamental para la transformación social de los territorios.

En cuanto al acceso a servicios públicos, el 50 % de los asociados consideran que el acceso es difícil y la calidad es baja en servicios básicos como electricidad, agua y gas, debido a limitaciones geográficas que dificultan la prestación eficiente de estos servicios. Sin embargo, el 33,3 % de los encuestados considera que el acceso es bueno, contraste que puede deberse a una ubicación más favorable que les facilita el acceso o a la colaboración entre los asociados para establecer mecanismos o conexiones que les permiten obtener estos servicios sin depender del Estado o de las entidades prestadoras.

En lo que respecta a las oportunidades laborales para los jóvenes pertenecientes a las familias de los asociados, el 61,1 % indica que con frecuencia optan por trasladarse a las ciudades en busca de una educación de mayor calidad y mejores perspectivas laborales y profesionales para aumentar los ingresos de sus familias. Sin embargo, esta tendencia genera preocupación, ya que resulta en una disminución de la población activa en las áreas rurales y contribuye a la falta de acceso a una educación de calidad en estas zonas, lo que a su vez crea desafíos en términos de competitividad para los agricultores locales. Además, la migración de los jóvenes implica

que no pueden contribuir a las labores agrícolas ni a la gestión de las fincas, lo que obliga a los padres a asumir toda la responsabilidad o contratar personal adicional, lo que aumenta los costos y reduce las ganancias para los productores principales.

Desde la perspectiva cultural, se exploró la participación de los asociados en la elección de líderes comunitarios, alcaldes y gobernadores. Se observó que el 27,78 % rara vez o nunca participa en estas elecciones debido a la percepción de que los candidatos gubernamentales no cumplen sus promesas y la falta de presencia estatal en la satisfacción de sus necesidades. Por otro lado, el 16,67 % afirmó que siempre participan en estas elecciones como un deber y derecho, considerándolo una oportunidad para seleccionar candidatos que puedan contribuir al desarrollo de su territorio. Además, a través de las asociaciones, han tenido la oportunidad de involucrarse en la democracia y expresar sus preocupaciones y necesidades, lo que refleja una forma de gobernanza abierta que promueve el desarrollo sostenible en colaboración con la ciudadanía, mientras el 55,55 % indicó que participa ocasionalmente en estas elecciones.

En cuanto a los aspectos ambientales, se identificó que el 50 % de los encuestados no tiene prácticas ambientales definidas en sus actividades agrícolas y de transformación de productos. Además, el 33,3 % las emplea ocasionalmente debido a la falta de capacitación y educación ambiental, lo que refleja la necesidad de una mayor conciencia y conocimiento sobre buenas prácticas ambientales en el sector. Esta falta de implementación de prácticas ambientales puede tener un impacto negativo en el entorno, ya que los recursos naturales se utilizan de manera ineficiente, lo que es esencial para la producción agrícola y el circundante. Solo el 16,67 % de los encuestados tiene un conocimiento y aplicación regular de prácticas ambientales, lo que subraya la importancia de la participación del Estado, las instituciones educativas y las empresas privadas en la capacitación y apoyo en estos procesos.

Finalmente, se observa que el 56 % de los asociados están a favor de que el mango y sus productos derivados, como dulces, compotas y mermeladas, sean reconocidos a nivel nacional. Este reconocimiento podría servir como un incentivo para que los jóvenes regresen al campo y contribuyan al desarrollo agrícola y técnico después de recibir educación y

capacitación en entornos urbanos. Esto, a su vez, podría llevar a un aumento en los ingresos económicos, una mejora en la calidad de vida y la satisfacción de las necesidades de las familias campesinas.

Conclusiones

Los resultados del análisis indican que la implementación del Modelo de Territorios Solidarios tiene corolarios en las dimensiones económicas, sociales, culturales y ambientales de las comunidades, y se han identificado factores tanto favorables como desfavorables. Los productores de las organizaciones agrícolas en El Espinal han experimentado beneficios derivados de este modelo, ya que han logrado un mayor empoderamiento y colaboración en beneficio de todos. Esto ha resultado en una mejora en su calidad de vida en términos socioeconómicos con respecto a la generación anterior.

A pesar de los beneficios obtenidos, los productores siguen enfrentando dificultades debido a la falta de apoyo gubernamental para mejorar su calidad de vida. Existe una carencia de inversión en infraestructura para el desarrollo rural integral de los territorios, así como apoyo insuficiente para los procesos productivos y la distribución. Además, se enfrentan a un aumento constante en el costo de abonos orgánicos y bioinsumos necesarios para proteger la fruta. También se carece de acceso a tecnologías limpias que podrían aprovechar los residuos y potenciar la producción y transformación de productos de mango de alta calidad.

La inversión en la mejora de las actuales vías de acceso rural es fundamental para el desarrollo de los territorios solidarios en zonas rurales, como la zona de estudio. También es necesario abrir nuevas vías que faciliten la comercialización de los productos agrícolas y garantizar un acceso regular y económico a servicios públicos, así como a servicios de salud y educación.

Además, se debe fomentar la participación activa de los productores en organizaciones de economía solidaria, ya que estas se centran en la eficiencia en el mercado, priorizando los objetivos sociales y promoviendo una democratización de la economía basada en la reciprocidad, la redistribución y el apoyo mutuo.

Por otra parte, la falta de acceso a una educación de calidad en la zona rural, donde escasean las universidades, ha llevado a que muchos jóvenes de familias asociadas se desplacen a la ciudad en busca de mejores oportunidades profesionales y laborales. Esto, a su vez, contribuye a la disminución del crecimiento del territorio rural y a la fragmentación de las familias. En este contexto, es crucial que las asociaciones prioricen la educación como un pilar fundamental en su enfoque cooperativo. Deben asegurarse de que todos sus miembros y sus familias tengan acceso a una formación de calidad que incluya aspectos como nuevas tecnologías, innovaciones, cambios sociales y el desarrollo agroindustrial desde una perspectiva solidaria. Es importante enseñarles a aprovechar las herramientas disponibles y concienciarlos sobre el modelo que promueven para generar conciencia y riqueza colectiva sostenible.

Se observó que los asociados muestran una baja participación en las elecciones de gobernantes o alcaldes debido a las numerosas promesas incumplidas y la falta de interés de los líderes gubernamentales por el sector rural. No obstante, algunos asociados todavía mantienen la esperanza de que, al cumplir con su deber cívico, puedan influir en la toma de decisiones y políticas públicas que beneficien al crecimiento y desarrollo de la zona rural. En relación con la cultura ambiental, es esencial que las asociaciones presten mayor atención a las prácticas utilizadas en las labores productivas y de transformación. Se requiere capacitación y formación para promover prácticas agrícolas sostenibles y evitar la pérdida de recursos naturales.

Se concluye que, para el fortalecimiento de las comunidades mediante el Modelo de Territorios Solidarios, requiere fortalecer los corolarios o principios de este enfoque. A pesar de contar con una cultura de solidaridad, asociatividad y participación democrática orientada a mejorar los ingresos y la calidad de vida, es esencial la participación activa del Estado para brindar apoyo financiero, mejorar la infraestructura vial y tecnológica, y facilitar el acceso a la educación de calidad a través de instituciones de educación superior, las cuales pueden desempeñar un papel crucial al ofrecer oportunidades de aprendizaje asequibles y fortalecer conocimientos, habilidades y competencias en áreas relevantes para el desarrollo del campo, la agricultura familiar y las organizaciones que conforman el territorio solidario.

Referencias

- Agribusiness in Developing and Emerging Economies*. 8(3). 554-578 DOI 10.1108/JADEE-01-2017-0016
- Álvarez, J. F. (2017). *Economía social y solidaria en el territorio: significantes y co-construcción de políticas públicas*, núm. 2, Colombia: Pontificia Universidad Javeriana.
- Amariles, C. (2017). Notas para pensar, el territorio solidario, en *Unisangil Empresarial*, vol. 10, (5-16), Colombia: Fundación Universitaria de San Gil.
- Arango, L. J. et al. (2020). Desarrollo agroindustrial: restricciones económicas, políticas y naturales, en *Aglala*, vol. 11, núm. S1, (211-229), Colombia: Corporación Universitaria Rafael Núñez.
- Ardila, C. A. et al. (2020). Resilience and peasant economy: A case study in the Colombian Andes, in *Journal of Depopulation and Rural Development Studies*, núm 30, (19-44), doi:10.4422/ager.2020.11, España: AGER
- Arias, J. et al. (2016). El protocolo de investigación III: la población de estudio, en *Alergia México*, vol. 63, núm. 2, (201-20), México: Colegio Mexicano de Inmunología Clínica y Alergia, A.C.
- Baldi, et al. (2019). How alternative food networks work in a metropolitan area? An analysis of Solidarity Purchase Groups in Northern Italy, in *Agricultural and Food Economics*, vol. 7, núm. 20, doi:10.1186/s40100-019-0139-3, Italia: Università degli Studi di Milano.
- Barrios, J. (2019). Impacto de la Innovación en la Competitividad de las Empresas del Sector Agroindustrial, en el Espinal-Tolima, en *Innova ITFIP*, vol. 4, núm. 1, (7-20), Colombia: Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional ITFIP.
- Battisti, L. et al. (2020). Las perspectivas Latinoamericana y Europea de la Economía Solidaria, en REVESCO. *Revista de Estudios Cooperativos*, vol. 134, núm. e69171, doi:10.5209/reve.69171, España: Universidad Complutense de Madrid.
- Bernardi, A. et al. (2021). Sustainable but Not Spontaneous: Co-Operatives and the Solidarity Funds in Italy, in *Sustainability*, vol. 14, núm. 4516, doi:10.3390/su14084516, Suiza: MDPI

- Blanco, L. Y. (2018). *Procesos de transformación agroindustrial en las organizaciones rurales de economía solidaria en Colombia*. Universidad de Valencia, Colombia: Red Unicossol.
- Buendía, X. P. et al. (2018). El desarrollo de competencias investigativas de los docentes en formación en el contexto de la práctica pedagógica, en *Folios*, núm. 47, (179-195). Universidad Pedagógica Nacional.
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). (2021). *Perspectivas de la Agricultura y del Desarrollo Rural en las Américas: una mirada hacia América Latina y el Caribe 2021-2022*. ISBN: 978-92-9248-920-5 <https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/47208/1/CE>
- Congreso de Colombia. Agosto 6 de 1998. Ley 454 de 1998 Reglamentada por el Decreto Nacional 1714 de 2012 Por la cual se determina el marco conceptual que regula la economía solidaria... *Diario Oficial No. 43.357* https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=3433
- Corporación Colombiana de Investigaciones Agropecuarias, Corpoica y Asociación Hortifrutícola de Colombia, Asohofrucol (2013). Modelo Tecnológico para el cultivo del mango en el Valle del alto Magdalena en el Departamento del Tolima. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
- Corzo, N. et al. (2020). Una mirada a las Organizaciones Solidarias activas en la Provincia de Guanentá Departamento de Santander Colombia, en *Cooperativismo e Desarrollo*, vol. 28, núm. 118, (1-29), doi:10.16925/2382-4220.2020.03.01, Colombia: UCC.
- Dávila, R. et al. (2018). Características de la economía solidaria colombiana. Aproximaciones a las corrientes predominantes en Colombia, en *Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa*, núm. 93, (85-113), doi:10.7203/CIRIEC-E.93.10327, España: CIRIEC.
- Di Masso, M. et al. (2021). Mujeres en la Economía social y solidaria: ¿alternativas socioeconómicas para todas?, en *Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa*, núm. 102, (123-159), doi:10.7203/CIRIEC-E.102.17557, España: Ciriec.

- Duque, P. et al. (2021). Economía Social y Economía Solidaria: un análisis bibliométrico y revisión de literatura, en REVESCO. *Revista de Estudios Cooperativos*, vol. 138, núm. e75566, doi:10.5209/reve.75566, España: Universidad Complutense de Madrid.
- Edelman, M. (2022). ¿Qué es un campesino? ¿Qué son los campesinos? Un breve documento sobre cuestiones de definición. *Revista Colombiana de Antropología*, 58 (1), 153-173. Epub 31 de diciembre de 2021. <https://doi.org/10.22380/2539472x.2130>
- Guevara, G. P. et al. (2020). Metodologías de investigación educativa (descriptivas, experimentales, participativas, y de investigación-acción), en *Revista Científica Mundo de la Investigación y el Conocimiento*, vol. 4, núm. 3, (163-173), doi: 10.26820/recimundo/4.(3), Ecuador: Saberes del Conocimiento.
- Guridi, L. et al. (2011). *Experiencias de Economía social y solidaria: compartiendo estrategias y aprendizajes*. Asociación REAS Euskadi.
- Guridi, L. y De Mendiguren, J. C. (2014). *La dimensión económica del Desarrollo Humano Local: La Economía social y solidaria*. Instituto Hegoa.
- Juste, J. J. et al. (2011). *Economía social y desarrollo local/rural. Un análisis de sus sinergias*, en *Estudios de Economía Aplicada*, vol. 29, núm. 1, (189-222), España: Universidad de Almería.
- Mason, L. et al. (2019). Producing territory: territorial organizing of movements in Buenos Aires, in *Geographica Helvetica*, vol. 74, (153–161), doi:10.5194/gh-74-153-2019, Suiza: Swiss academy of sciences.
- Moya, F. (2011). *Responsabilidad social y ética en el sector agroindustrial colombiano*, (90-95). Universidad Autónoma del Caribe.
- Mwambi, M., Bijman, J., & Galie, A. (2021). The effect of membership in producer organizations on womens empowerment: Evidence from Kenya. *Womens Studies International Forum*, 87(102492), 114. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S027753952100056X>
- Otero, A. (2018), Enfoques de investigación, en *Researchgate*, vol. 14, España: Universidad de Murcia.
- Peón, D. et al. (2020), Productive vs. residential economy: Factors behind the recovery of rural areas in socioeconomic decline, in *Galega de Economía*, vol. 29, núm. 2, doi:10.15304/rge.29.2.6744, España: Universidad de Santiago de Compostela.

- Pérez, E. & Uribe, V. H. (2016). Reflexiones para conceptualizar territorio solidario, en *El Ágora USB*, vol. 16, núm. 2, (533-546). Universidad de San Buenaventura Medellín.
- Piccoli, A., et al. (2021). A Socially-Based Redesign of Sustainable Food Practices: Community Supported Agriculture in Italy, in *Sustainability*, vol. 13, núm. 11986, doi:10.3390/su132111986, Suiza: MDPI.
- Pilquimán, M. et al. (2020). Experiences of Resilience and Mapuche Community Based Tourism in the Pre-Cordilleran Territories of Panguipulli, Southern Chile, in *Sustainability*, vol. 12, núm. 817, doi:10.3390/su12030817, Suiza: MDPI.
- Rodríguez et al. (2022). Influencia del modelo de ecorregión solidaria aplicado en el desarrollo sostenible de comunidades rurales del sur oriente del Tolima. En M. S. Rodríguez-Barrero et al. (Ed.) *Perspectivas Interdisciplinarias de la sostenibilidad* (1 Ed., Vol. 2, pp. 171-199). Editorial CIDE Ecuador.
- Rúa, S. et al. (2018). La integración económica desde la perspectiva solidaria. En *Modelos de integración económica solidaria: teoría y acción*, 19-44, Bogotá: Universidad Cooperativa de Colombia.
- Sathapatyanon, J., Kuwornu, J. K., Shivakoti, G. P., Soni, P., Anal, A. K., & Datta, A. (2018). *The role of farmer organizations and networks in the rice supply chain in Thailand*. *Journal of*
- Schwab, F. et al. (2020). Economía social y solidaria y agroecología en cooperativas de agricultura familiar en Brasil como forma de desarrollo de una agricultura sostenible, en *Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa*, núm. 98, 189-211, doi:107203/CIRIEC-E.98.14161, España: CIRIEC
- Serna, H. & Rodríguez, M. S. (2016). El sector solidario como alternativa para el desarrollo social e inclusivo en el postconflicto colombiano. *Cooperativismo & Desarrollo*, 23(107). <https://doi.org/10.16925/co.v23i107.1250>
- Serrano, L. V. & Torres, O. (2022), Analisis del crecimiento del sector de economía solidaria en el área de agricultura y su aplicación a la formación, en *Publicaciones*, vol. 52, núm. 3, (353–364), doi:10.30827/publicaciones.v52i3.22277, España: Universidad de Granada.
- Sociedad de Agricultores de Colombia (2020). *El agro y la agroindustria* en Colombia, Bogotá: Consuelo Mendoza Ediciones.

- Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias UAEOS (2016). *Construyendo Territorios Solidarios. Guía metodológica*. Colombia: Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, Fundación Universitaria de San Gil, Fundación Coomudelsa.
- Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, Fundación Universitaria de San Gil y Fundación Coomuldesa. (2016). *Construyendo territorios solidarios*. Guía metodológica ISBN 978-958-58321-1-4. <https://www.uaeos.gov.co/sites/default/files/archivos/Construyendo%20Territorios%20solidarios%2C%20Gu%C3%ADa%20Metodol%C3%B3gica.pdf>
- Ventura, J. L. (2017), ¿Población o muestra? Una diferencia necesaria, en *Revista Cubana de Salud Pública*, vol. 43, núm. 3, (648-649), Cuba: Escuela Nacional de Salud Pública.
- Vivas, J. (2021). *Criterios para un marco de políticas públicas de transición hacia la agroecología en Colombia*. [Tesis Doctoral]. Universidad Nacional de Colombia.
- World Bank Food Security Update. (May 2023). *Global Food and Nutrition Security Dashboard*. <https://www.worldbank.org/en/topic/agriculture/brief/foodsecurity>